

bierno, y por lo mismo, aun cuando ellas sean de estimarse en el juicio respectivo, no pueden estorbar el ejercicio de la facultad económico-coactiva, hasta dejar asegurada á la Hacienda pública, segun el artículo 189 de la ley de 20 de Enero de 1837, antes citada.

Por las razones y fundamentos expuestos, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada, respecto de este juicio el 14 de Enero último por el Juez de Distrito de Sinaloa, que declara: que la Justicia federal ampara y protege á D. Miguel Careaga, socio de la casa Careaga y compañía, contra la providencia del ciudadano Administrador de la Aduana Marítima, dictada en uso de la facultad económico-coactiva, para exigir por medio de ella á la expresada casa la cantidad de ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos diez centavos; y se declara: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Miguel Careaga, socio gerente de la casa Careaga y compañía, contra el mencionado acto del Administrador de la Aduana Marítima de Mazatlan.—Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron, con escepcion de un solo voto en contra, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 4 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. J. de la Quintana y Compañía, contra los procedimientos del C. Administrador de la Aduana marítima de Mazatlan, que le exige por medio de la facultad económico-coactiva, el pago de derechos causados por la introduccion á este Puerto de mercancías extrangeras, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Los Sres. J. de la Quintana y Compañía, se han presentado ante U. solicitando amparo contra los procedimientos del C. Administrador de esta Aduana marítima, que les exige, en ejercicio de la facultad económico-coactiva, el pago del treinta y tres por ciento de los derechos que enteraron á los sublevados de este Puerto, por las importaciones, y en las fechas que se determinan en el escrito relativo. La peticion se ha hecho por creerse violadas con los procedimientos administrativos, las garantías que conceden el artículo 16 y la parte final del 89 de la Constitucion general de la República. El primero de estos artículos, dice testualmente: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". Es así que en el presente caso se ha procedido contra los Sres. J. de la Quintana y Compañía por el Administrador de la Aduana marítima, con total sujecion á las prescripciones del artículo antes citado; luego siendo como es el Administrador de la Aduana, la autoridad competente en virtud de la ley de 11 de Diciembre de 1871, que declaró vigente las de 20 de Enero de 1837 y de 20 de Noviem-

bre de 1838 para ejercer la facultad económico-coactiva; es evidente que no se han violado las garantías cuyo amparo se invoca. Respecto de la queja que se funda en la parte final del artículo 8º, también de la Constitución, cree el que suscribe que será motivo para exigir la responsabilidad oficial al Administrador, pero nunca para intentar el juicio de amparo que se promueve. Todas las razones, todos los fundamentos de la petición de los Sres. J. de la Quintana y Compañía, serán buenos para formalizarse en un juicio contencioso y presentándose como excepciones acaso admisibles en sus procedimientos, pero que absolutamente son extemporáneos en un juicio de amparo. Que los pagarés son nulos como arrancados por la fuerza; que los arreglos hechos con el Presidente Juárez no tienen valor, aunque no son otra cosa que la ratificación de aquellos, y un compromiso para pagar solo el treinta y tres por ciento de lo que importaron los derechos causados; todo esto no puede dilucidarse ni mucho menos resolverse sino por un juicio contencioso declarativo, que dirima para siempre estas cuestiones. Entre tanto, estando los pagarés á la orden de la Administración; terminado el arreglo con el Gobierno para el pago del treinta y tres por ciento, y vigente la ley que concede el ejercicio de la facultad coactiva, es evidente que no existe la violación de las garantías que impetran los Sres. J. de la Quintana y Compañía, y que no procede su recurso. Para mayor corroboración de lo expuesto, el fiscal se refiere punto por punto, al informe rendido por el C. Administrador de la Aduana marítima, y por todo pide que se resuelva: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los Sres. J. de la Quintana, contra el cobro de ciento tres mil seis cientos noventa y dos pesos, setenta y seis centavos, que les cobra aquel empleado por medio de la facultad coactiva.—Mazatlan, Enero 3 de 1873.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Enero 9 de 1873.—Visto el juicio seguido sobre amparo que D. J. Marcelino Gonzalez de Lapidana como gerente de la casa J. de la Quintana y Compañía, promueve contra la providencia que el C. Administrador de la Aduana marítima ha dictado en uso de la facultad económico-coactiva, para hacer efectivo el cobro de la cantidad de (\$103.692,76) ciento tres mil seiscientos noventa y dos pesos, setenta y seis centavos que les exige por derechos de importación que causaron los efectos descargados en este puerto del buque alemán "Frederick Hartwig" y de los vapores americanos "Ydaho" y "Constitution", por considerar con tal providencia violada la garantía que el artículo 16 de la Constitución general otorga á todo propietario, y por la falta que se cometió de la parte final del artículo 8º de la misma Constitución; alegando para lo primero, que dicho empleado no es autoridad competente para haber decretado el mandamiento de ejecución con que inició el procedimiento coactivo de que se queja, y para lo segundo, que se le negó copia autorizada de dicho mandamiento y de los recados que pidió al ser notificado de pago. Visto también, la petición y lo resuelto sobre el punto de suspensión que del procedimiento económico-coactivo se pidió; los documentos presentados por el quejoso, y lo pedido por el C. promotor fiscal, con todo lo mas que ver convino.

Considerando: que este juicio está promovido solo contra el procedimiento que adoptó el Administrador de la Aduana, y no porque la parte quejosa pretenda que deje de cobrársele ante los tribunales que de tal reclamo deben conocer, para ante ellos alegar las excepciones que cree favorecerle.

Considerando también: que la ley de 20 de Enero de 1837 en que el Administrador de la Aduana funda su procedimiento, expresamente prohíbe en su artículo 1º á los empleados, ingerirse en la jurisdicción con-

tenciosa que corresponde á los jueces, declarando en el 2º, que por contencioso se entiendan aquéllos en que sean forzosas las actuaciones judiciales ó en las que se dispute la paga por la variación de tiempo y circunstancias, y ofrezcan motivo fundado de dudas para la aplicación de la ley, y prohíbe en el 3º que pueda tener lugar providencia alguna coactiva, cuando el derecho del fisco no sea claro ó indudable.

Considerando asimismo: que de autos consta que el quejoso alega coacción y fuerza para haber extendido el pagaré, por el que se le cobra dicha cantidad, cuyo alegato debe oírse en juicio para resolver si tal coacción es ó no bastante en derecho para desvirtuar la fuerza de dicho documento, cuya nulencia no cabe en la facultad económico-coactiva, á la vez que teniendo el valor de una excepción admisible, solo á los tribunales compete resolver sobre su admisión.

Considerando igualmente: que de autos también consta que el pagaré en cuestión fué innovado á consecuencia de la rebaja que de él se hizo, y después se mandó que se considere en su primitivo valor, lo que implica una verdadera resolución judicial, para determinarse que cantidad deba pagar el quejoso, cuyas circunstancias exigen actuaciones judiciales para poder apreciar los efectos legales que haya ocasionado dicha innovación, supuesto que con ella se ofrece ya fundadamente una duda sobre la aplicación de la ley, porque en el día, á consecuencia de la misma innovación, no puede decirse que sea claro ó indudable el derecho que reclama el fisco.

Considerando también: que si bien la Hacienda pública tiene un derecho indisputable para que se le paguen los derechos de importación que causan los efectos extranjeros que se descarguen en los Puertos de la República, y para cuyo cobro pueden los empleados usar de la facultad económico-coactiva, el que hoy ejerce no puede tenerse tan claro cuanto se necesita, para que no haya disputa sobre su legalidad, por las

circunstancias que precedieron al otorgamiento del pagaré; que en seguridad de los derechos que cobra, se extendió por la variación de la cantidad de él, y de la obligación en que se considera al que se cree responsable de tales derechos, y por último, por las excepciones que en su concepto le favorecen para no considerarse deudor de la suma que se le cobra, pues para la resolución que sobre todo debe darse, se requiere conocimiento de causa, el que no puede tenerse por medio de la facultad económico-coactiva. En consideración por último, á que el fisco siempre tiene su derecho expedito para exigir en juicio de los responsables, la indemnización que cree se le debe, ya sea persiguiendo á los que reputo causantes de los derechos, ó ya á los efectos que los causaron, y en defecto de estos á los demás bienes que se reconozcan por de aquellos, según los Tribunales resuelvan en mérito de Justicia y con conocimiento de causa.

Por estas razones, y teniendo presente la ejecutoria expedida por la Suprema Corte de Justicia en 11 de Marzo del año próximo pasado, constante en las páginas 195 y 196 de la segunda parte del Semanario Judicial, y con fundamento de los artículos 16 y 101 de la Constitución general, y de la fracción 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, falló con las siguientes proposiciones: 1ª: La Justicia de la Unión ampara y protege á D. J. Marcelino González de Lapidana, contra la providencia dictada por el C. Administrador de la Aduana marítima, en virtud de la que, se procedió al acto de exigir por medio de la facultad económico-coactiva á la casa de J. de la Quintana y Compañía, de la que es socio el quejoso, la cantidad de ciento tres mil seiscientos noventa y dos pesos, setenta y seis centavos, por derechos de importación que causaron los efectos descargados en aquel Puerto del buque alemán Frederick Hartwig y de los vapores americanos Idaho y Constitution. 2ª: Sáquense dos co-

pias de esta sentencia, una para su publicacion en el periódico oficial del Gobierno, y la otra para remitirse al Semanario Judicial, previa notificacion que se haga de ella. 3ª: Concluidas dichas copias, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su revision.

El Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó con los de asistencia.—*Pedro S. Bermúdez.*—A.—*Antonio C. Iturrías.*—A.—*Aurelio Padilla.*

Es copia. Mazatlán, Enero 13 de 1873.—*Pedro S. Bermúdez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 13 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido en 21 de Diciembre de 1872, en el puerto de Mazatlán, ante el Juez de Distrito de Sinaloa por D. J. Marcelino Gonzalez de Lapidana, en representacion de la casa J. de la Quintana y Cª, contra el cobro que por disposicion de la Union y en ejercicio de la facultad económico-coactiva, les hace el Administrador de aquella Aduana marítima, de *ciento tres mil seiscientos noventa y dos pesos, setenta y seis centavos*, como derechos de importacion causados por las mercancías extranjeras que descargó la Barca alemana "Frederick Hartwig" fondeada en aquel puerto el 23 de Enero del mismo año de 1872, y de novecientos setenta y siete pesos, treinta y cuatro centavos, como derechos de importacion causados por las mercancías que á la consignacion de la propia casa trajeron los vapores "Ydaho y Constitution," fondeados en aquel puerto en 11 de Noviembre y 8 de Diciembre de 1871; con cuyo cobro y procedimiento alegan los quejosos, que se han violado en ellos las garantías que les otorga el artículo 16 de la Constitucion federal, por cuanto á que, en virtud de las escepciones que han opuesto contra

el cobro, creen que este se ha convertido en un asunto contencioso del resorte de los Tribunales, y que no da lugar á la facultad económico-coactiva; sosteniendo además, que por no haberles resuelto nada el expresado Administrador, acerca de la copia autorizada que le pidieron del mandamiento de pago y recados en que se fundaba, se ha violado en ellos la garantía que otorga el artículo 8º de la misma Constitucion federal.

Vistos, el informe del Administrador de la Aduana; lo pedido por el Fiscal, y las demas constancias de estos autos.

Considerando, en cuanto á la violacion supuesta del artículo 8º de la Constitucion federal: 1º: Que ese artículo se refiere únicamente á las peticiones que se hagan respetuosamente y por escrito; y no consta que fuera de esa clase la que los quejosos dirigieron al Administrador de la Aduana. 2º: Que aun cuando fuera la peticion respetuosa y por escrito, como por una parte el proveido muy bien hubiera podido no ser de conformidad, sin que por esto se violara ninguna garantía, y como por otra parte, ya en el transcurso de este juicio se han presentado todos los documentos requeridos, de los que pueden sacar los interesados todas las copias simples ó autorizadas que necesitan; su reclamacion actual ya no puede tener ningun objeto serio, como podria tenerlo acaso, en el juicio de responsabilidad, y de daños y perjuicios.

Considerando, en cuanto á la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitucion: 1º: Que los Sres. J. de la Quintana y Cª en su escrito de demanda, y en las diversas protestas hechas por sí ó á su nombre, convienen en que han sido los consignatarios de mercancías extranjeras, venidas á bordo de los vapores "Idaho y Constitution," cuyos derechos de importacion, conforme al arancel vigente, ascendieron á novecientos setenta y siete pesos, treinta y cuatro centavos. 2º: Que los mismos Sres. J. de la Quintana y Cª en su protesta formulada en 25 de Setiembre de 1872, ante

el Escribano público Jesus Gonzalez Meneses, ratificando las protestas hechas en 27 y 28 de Mayo del mismo año, confiesan haber vendido el cargamento de la Barca alemana "Frederick Hartwig," á D. Benjamin R. Carman, consignatario del mismo cargamento. 3º: Que si los espresados Sres. J. de la Quintana y Cª han podido vender á D. Benjamin R. Carman, el cargamento de la Barca "Frederick Hartwig," conforme á las leyes no pueden considerarse, puesto que no han dado otra providencia sino como los dueños importadores de esas mercancías, ó sus representantes legítimos, para los efectos de transmitir el dominio de ellas, y de pagar los derechos de importación causados. 4º: Que por haber estado aquel puerto en poder de los revoltosos, desde 17 de Noviembre de 1871 hasta Mayo de 1872, ni se habian cobrado á los Sres. J. de la Quintana y Cª los derechos correspondientes á las mercancías que por el Vapor "Idaho" recibieron cinco dias antes de la rebelion, ni se habian examinado conforme á las leyes fiscales de la República, las mercancías importadas por el vapor "Constitution," y por la Barca "Frederick Hartwig." 5º: Que por el arancel vigente de Aduanas marítimas y fronterizas, todas las mercancías extranjeras que se introduzcan á la República, tienen que manifestarse y pagar las cuotas aduanales que él establece, ó de lo contrario se reputan contrabando y se incurre en las penas relativas. 6º: Que por las otras leyes y circulares que sirven de reglamento al arancel, la responsabilidad de ese pago ó del contrabando, corresponde á los consignatarios, dueños, importadores ó poseedores de las mercancías, de *mancomum é insolidum*, mientras pueda probarse la identidad ó procedencia de ellas, y mientras no esté satisfecha la Hacienda pública con el debido pago. 7º: que en la disyuntiva presentada en los dos considerandos anteriores, si el Gobierno de la Union atendiendo á las circunstancias, y autorizado ampliamente al efecto, no ha creí-

do deber tratar como contrabandistas á los Sres. J. de la Quintana y Cª, aun cuando la importación de las mercancías traídas por el vapor "Constitution" y por la Barca "Frederick Hartwig," se efectuara estando el puerto clausurado, al considerarlos como importadores leales ó como dueños de mercancías extranjeras legalmente importadas; no puede menos que cobrarles los derechos ó cuotas aduanales, que las dichas mercancías causaron, y que hasta hoy no se le han pagado. 8º: que en consecuencia, es legítimo, claro ó incuestionable, el derecho conque el Administrador de la Aduana exige el pago de todos esos derechos á los Sres. J. de la Quintana y Cª, aun admitiendo que los pagarés de plazo cumplido firmados por la casa, por el monto de esos derechos, tengan todos los defectos que se les objetan, y aun cuando tales pagarés no existieran. 9º: que esa legitimidad y claridad en el derecho con que la autoridad exige un pago, es todo lo que requiere para el ejercicio de la facultad económico-coactiva, segun el artículo 3º de la ley de 20 de Enero de 1837. 10º: Que las escepciones opuestas contra el cobro y que consisten en la fuerza que ejercieron los revoltosos sobre la importación de esas mercancías, y la exacción de sus derechos, y en el valor que deba tener ó deba darse en el caso de la rebaja de cuota ofrecida por el gobierno, no ponen en duda, antes bien, suponen y confirman su derecho; y por lo mismo, aun cuando tales escepciones sean de estimarse en el juicio respectivo, no pueden estorbar el ejercicio de la facultad económico-coactiva, hasta dejar asegurada á la hacienda pública, segun el artículo 18 de la ley de 1837 antes citada. 11º: Que respecto de las mercancías que importó la casa por el vapor "Idaho" no milita ni la escepcion de fuerza ejercida para la importación. 12º: Que por lo expuesto, en el presente caso, el Administrador de la Aduana marítima de Mazatlan está en su pleno derecho para ejercer la facultad económico-coactiva,

respeto de la casa J. de la Quintana y Compañía, por la cantidad de los derechos causados por las mercancías que recibieron como consignatarios, dueños, importadores ó poseedores, en los vapores "Ydaho" y "Constitution," y en la barca "Frederick Hartwig."

Por tales razones y fundamentos, y con apoyo en la fracción 1ª artículo 101 de la Constitución, se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Sinaloa que concedió el amparo á los quejosos, y se declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á D. J. Marcelino Gonzalez de Lapidana representante de la casa J. de la Quintana y compañía, contra el cobro que por disposición del Gobierno de la Unión y en ejercicio de la facultad económico-coactiva, les hace el Administrador de la Aduana Marítima de Mazatlan, de ciento tres mil seiscientos noventa y dos pesos, setenta y seis centavos, como derechos de importación causados por las mercancías extranjeras, que descargó la Barca alemana "Frederick Hartwig," fondeada en aquel puerto el 23 de Enero de 1862; y de novecientos setenta y siete pesos, treinta y cuatro centavos, como derechos de importación causados por las mercancías que á la consignación de la propia casa, trajeron los vapores "Ydaho" y "Constitution" fondeados en aquel puerto en 11 de Noviembre y 8 de Diciembre de 1871.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por todos los votos, menos uno, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*

rez.—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis M. Aguilar,* secretario

Es copia que certifico. Mexico, de 1873.
—*Lic. Enrique Landa* oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Carlos Pasow, como socio gerente de la casa Melchers Sucesores del comercio de Mazatlan, contra el Administrador de la Aduana Marítima de este Puerto, que cobra á dicha casa, por medio de la facultad económico-coactiva, la cantidad de \$ 80. 753, 79. por los derechos de importación de varias mercancías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Como este juicio de amparo es enteramente idéntico al que se ventila en ese mismo juzgado por los SS. J. de la Quintana y Compañía en el que tengo ya entendido mi parecer; creo de mi deber reproducirlo para obrar en consecuencia: dice así.—"Los SS. J. de la Quintana y Compañía se han presentado ante V. solicitando amparo contra los procedimientos del C. Administrador de esta Aduana Marítima, que les exige en ejercicio de la facultad coactiva el pago del treinta y tres por ciento de los derechos que enteraron á los sublevados de este Puerto por las importaciones, y en las fechas que se determinan en el escrito relativo. La petición se ha hecho por creerse violadas con los procedimientos administrativos, las garantías que conceden los artículos 16 y la parte final del 8º de la Constitución general de la República.—El primero de dichos artículos dice testualmente: "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,